



eCOMMONS

Loyola University Chicago  
Loyola eCommons

---

History: Faculty Publications and Other Works

Faculty Publications and Other Works by  
Department

---

2019

## Claves para Repensar la Violencia e Inseguridad en Mexico

Gema Kloppe-Santamaría  
gsantamaria@luc.edu

Rafael Fernández de Castro

Follow this and additional works at: [https://ecommons.luc.edu/history\\_facpubs](https://ecommons.luc.edu/history_facpubs)



Part of the [History Commons](#), and the [Social and Behavioral Sciences Commons](#)

---

### Recommended Citation

Kloppe-Santamaría, Gema and Fernández de Castro, Rafael. Claves para Repensar la Violencia e Inseguridad en Mexico. Seguridad humana y violencia crónica en México : nuevas lecturas y propuestas desde abajo, , : 265-284, 2019. Retrieved from Loyola eCommons, History: Faculty Publications and Other Works,

This Book Chapter is brought to you for free and open access by the Faculty Publications and Other Works by Department at Loyola eCommons. It has been accepted for inclusion in History: Faculty Publications and Other Works by an authorized administrator of Loyola eCommons. For more information, please contact [ecommons@luc.edu](mailto:ecommons@luc.edu).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative Works 3.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).  
© 2019 Instituto Tecnológico Autónomo de México

---

Conclusiones.  
Claves para repensar  
la violencia e inseguridad en México:  
algunas lecciones de la co-construcción  
*Gema Kloppe-Santamaría y Rafael Fernández de Castro*

El año 2007 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de la violencia en México. No sólo es el año en el que el gobierno mexicano, bajo la presidencia de Felipe Calderón, lanzó una estrategia de combate frente al narcotráfico que trastocaría de manera sustancial el contexto de seguridad del país; es el año también en el que dio inicio una tendencia a la alza en la tasa de homicidios a nivel nacional que revirtió una trayectoria histórica decreciente que se había observado desde la década de 1940 en el país.<sup>1</sup> A partir de entonces, México ha experimentado un deterioro considerable en los indicadores de violencia e inseguridad, incluyendo delitos no letales tales como secuestros, extorsiones,

<sup>1</sup>Dicha tasa pasa de 8.1 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2007 a 21.5 en el año 2010 de acuerdo a datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). UNODC, *Global Study on Homicide 2013*, Vienna, Austria, marzo de 2014. Para datos históricos de homicidio en México, véase Pablo Piccato, *Estadísticas del crimen en México. Series históricas, 1901-2001*. Consultado el 1 de noviembre de 2018. Disponible en: <http://www.columbia.edu/~pp143/estadisticascrimen/EstadisticasSigloXX.htm>

violencia intrafamiliar y robos.<sup>2</sup> Lo anterior ha estado acompañado del aumento en formas más visibles y crueles de violencia, como la aparición de cuerpos descuartizados o colgados de puentes en la vía pública. Aunque la violencia no es un fenómeno ajeno a la historia del país ni a su contexto político y social, es innegable que tanto cuantitativa como cuantitativamente la violencia ha cambiado.<sup>3</sup>

Frente a este contexto, en los últimos diez años han surgido numerosos estudios que han buscado entender y dar sentido a la crisis de inseguridad que afecta a México. Como otrora lo hicieron académicos y estudiosos de Brasil y Colombia, países que han logrado un cúmulo admirable de conocimiento en la materia, diversos especialistas se dieron a la tarea de entender las causales de la violencia en México y subrayar sus impactos en la democracia y el tejido social del país.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Véanse datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

<sup>3</sup>Existe una creciente y nutrida literatura producida por historiadores que da cuenta de la larga historia de violencia en el país. Una historia que había sido, hasta hace poco, eclipsada por estudios centrados en el funcionamiento de las instituciones, en las dinámicas de cooptación promovidas por el partido hegemónico PRI, así como por la supuesta estabilidad excepcional del país en comparación con otros países de América Latina. Véase, por ejemplo, Pablo Piccato, *A History of Infamy: Crime, Truth, and Justice in Mexico*, Oakland, CA, University of California Press, 2017; Paul Gillingham, “Who Killed Crispín Aguilar? Violence and Order in the Post-Revolutionary Countryside” y Alan Knight, “Narco-Violence and the State in Modern Mexico”, en Wil Pansters (ed.), *Violence, Coercion, and State-Making in Twentieth-Century Mexico*, Stanford, CA, Stanford University Press, 2012.

<sup>4</sup>Los autores trabajaron durante 2012 y 2013 en la elaboración del Informe sobre Seguridad Ciudadana en América Latina del pnud “Seguridad Ciudadana con Rostro Humano” (2014). Para ambos fue claro, a través de entrevistas realizadas con académicos brasileños y colombianos, cómo tanto cualitativa como cuantitativamente el estudio

Sin pretender ser exhaustivos, es posible afirmar que la mayor parte de los aportes y discusiones en torno a la violencia e inseguridad en México pueden situarse dentro de tres campos principales. Primero, están aquellos trabajos que han tratado de explicar los factores que han suscitado un repunte en los homicidios en el país, tanto a nivel nacional, como a nivel regional y local en los últimos 10 años.<sup>5</sup> En segundo lugar se encuentran estudios que han buscado entender las dinámicas de conflicto entre el Estado y los grupos criminales dedicados al narcotráfico, así como entre y en el interior de los grupos criminales mismos.<sup>6</sup> Y, en tercer lugar, están aquellos trabajos que han

---

de la violencia en dichos países había alcanzado un punto de sofisticación y profundidad que México carecía hasta ese momento. Ejemplos de ello incluyen el uso y disponibilidad de estadísticas del delito geo-referenciales en el caso de Brasil, o la riqueza de estudios etnográficos y de co-construcción del conocimiento promovidos en Medellín a través del Observatorio de Violencia en el caso de Colombia. Véase *Regional Human Development Report 2013-2014, Citizen Security with a Human Face: Evidence and Proposals for Latin America*, United Nations Development Programme (UNDP). <http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/idh-regional/>

<sup>5</sup>Las tensiones entre actores políticos en los distintos niveles de gobierno, la disrupción de acuerdos implícitos entre grupos criminales y actores estatales, y el cambio en la naturaleza del mercado de la droga en México son algunos de los principales factores destacados por estos trabajos. Angélica Durán Martínez y Richard Snyder, “Does illegality breed violence? Drug Trafficking and State-sponsored Protection Rackets”, *Crime, Law and Social Change*, vol. 52, núm. 3, 2009, pp. 253-73; David Shirk sobre violencia letal en México, trabajo de Guillermo Trejo y Sandra Ley sobre mayor impacto de homicidio en violencia contra alcaldes del prd. Fernando Escalante, “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso”, *Nexos*, 1 enero 2011, disponible en: <https://www.nexos.com.mx/?p=14089> [última consulta: 2 de diciembre de 2018]; Laura Calderón, Octavio Rodríguez y David Shirk, “2018 Drug Violence in Mexico Report”, *Justice in Mexico*, Instituto, disponible en: <https://justiceinmexico.org/2018-drug-violence-mexico-report/> [última consulta: 2 de diciembre de 2018].

<sup>6</sup>Guillermo Trejo y Sandra Ley, “Why Did Drug Cartels Go to War in Mexico? Sub-national Party Alternation, the Breakdown of Criminal Protection, and the Onset of Large-

tratado de analizar el impacto de la violencia en la calidad de la democracia en el país, tanto en términos de la confianza de la ciudadanía frente a la autoridad como en la popularidad o aceptación por parte de los ciudadanos de medidas represivas o extralegales para combatir el delito.<sup>7</sup>

A pesar de la riqueza de estos estudios y de los indudables aportes que éstos han hecho para iluminar las múltiples causas y consecuencias de la violencia en México, es claro que existen diversos vacíos analíticos que merecen ser atendidos. Uno de estos vacíos tiene que ver con la necesidad de ir más allá del homicidio en el entendimiento de la violencia en México. Si bien el homicidio constituye la expresión más dramática de la violencia, ésta no es ni la única ni —en la experiencia de habitantes de algunas de las zonas más inseguras del país— la más importante manifestación de violencia e inseguridad. En lugares como Tijuana, por ejemplo, a pesar de que la violencia letal alcanzó un nivel sin precedente durante el 2017, habitantes de la colonia Sánchez Taboada compartieron con el equipo de investigación que, para ellos, el delito común y no el homicidio constituye la principal

---

Scale Violence”, *Comparative Political Studies*, vol. 51, núm. 7, 2018, pp. 900-937; Benjamin Lessing, *Making Peace In Drug Wars: Cartels and Crackdowns in Latin America*, Cambridge Studies in Comparative Politics, 2017; Javier Osorio, “The Contagion of Drug Violence: Spatiotemporal Dynamics of the Mexican War on Drugs”, *Journal of Conflict Resolution*, *Special issue on Mexican drug violence*, vol. 59, núm. 8, pp. 1403-1432.

<sup>7</sup>Andreas Schedler, *En la niebla de la guerra: los ciudadanos ante la violencia criminal*, Ciudad de México, CIDE, 2015; Daniel Zizumbo-Colunga, “Explaining support for vigilante justice in Mexico”, *AmericasBarometer Insights*, 2010, núm. 39; José Miguel Cruz y Gema Santamaría, “Determinants of Support for Extralegal Violence in Latin America and the Caribbean”, *Latin American Research Review*, en prensa, por publicarse en vol. 54, núm. 1, marzo de 2019.

fuente de inseguridad. Como afirma el capítulo correspondiente a dicha ciudad, lo anterior se debe, en buena medida, a que la violencia letal es considerada selectiva y por tanto sus efectos se consideran menos perniciosos e impredecibles comparados con delitos como el robo, los cuales, se piensa, afectan a todos sin importar que estén o no involucrados en negocios ilícitos.

Además de ir más allá del homicidio, y como argumentan diversos capítulos del libro, los análisis de la violencia e inseguridad en México necesitan ir más allá de las explicaciones centradas tanto en el narcotráfico como en las políticas de combate frente al mismo. En las cuatro localidades de estudio del proyecto de investigación —Acapulco, Tijuana, Guadalupe, y Apatzingán— el mercado ilícito de la droga y el combate a los grupos criminales dedicados al narcotráfico han dejado una huella importante en la experiencia de inseguridad de las personas. Sin embargo, en todas estas localidades, la violencia no dio inicio en 2007 con la llamada guerra contra las drogas, y el repunte de la misma no fue un resultado exclusivo de los conflictos o enfrentamientos en torno al control del mercado ilícito de la droga. Como se discute vívidamente en el capítulo correspondiente a Apatzingán, la ciudad de la cual “partió la llamada ‘guerra contra las drogas’”, la violencia está vinculada con dinámicas de abandono y negligencia estatal que han estado presentes durante décadas. La falta de servicios e infraestructura pública básica, la falta de oportunidades educativas y laborales, y la presencia intermitente y predominantemente represiva del Estado han hecho de Apatzingán un lugar en el que los impactos de la violencia han derivado en

procesos de trauma progresivo que se transmiten de generación en generación.

Las cuatro localidades en las cuales se trabajó a lo largo de dos años ofrecen un panorama tanto rico como variado sobre las manifestaciones de la violencia en México. Seleccionadas en parte por esta variabilidad, pero sobre todo por las oportunidades que presentaban para llevar a cabo el tipo de trabajo de co-construcción que la metodología participativa y orientada a la acción demanda, dichas localidades permiten echar luz sobre algunas variables que no han recibido la atención debida dentro de la literatura especializada sobre la violencia e inseguridad en México. Estas variables apuntan a un diagnóstico que va más allá del homicidio y más allá de la violencia vinculada al narcotráfico. Evidencian, además, una serie de lecciones sobre los retos y posibles oportunidades que existen para elaborar respuestas y agendas locales de seguridad, con base en las voces y experiencias de los habitantes de las colonias más impactadas por la violencia.

Presentamos a continuación algunas de estas variables tanto de diagnóstico como respuesta a manera de “claves” para repensar la violencia e inseguridad no sólo en México, sino en América Latina.

El diagnóstico desde abajo  
o hablar de violencias en plural

Una de las principales variables explicativas que emergen de la labor de investigación de este proyecto es que la violencia no tiene una sino múltiples manifestaciones, que se expresan en dis-

tintos espacios de socialización, se transmiten de generación en generación y se expresan de manera sostenida e intensa a lo largo del tiempo. Jenny Pearce, co-investigadora de este proyecto, acuñó el término “violencia crónica” para dar cuenta de este fenómeno.<sup>8</sup> En el marco de este proyecto, la violencia crónica se puso de manifiesto en las experiencias compartidas por los habitantes de las colonias participantes. El homicidio, y más aún, el homicidio provocado por grupos criminales vinculados al narcotráfico, suele ser el foco de atención tanto de medios de comunicación como de políticos y tomadores de decisión. Sin embargo, el proceso de investigación hizo constar que esta manifestación de la violencia no es más que la punta del iceberg. Debajo de estos homicidios se tejen una multiplicidad de expresiones de violencia que van desde la violencia intrafamiliar y de género hasta la violencia y el hostigamiento ejercido en contra de jóvenes, especialmente hombres, por parte de las autoridades y grupos criminales.

Las dinámicas de abuso, discriminación y violencia en contra de las mujeres en el ámbito familiar estuvieron presentes en todos los casos de estudio. Lo anterior no tiene solamente efectos negativos en la salud mental y física de las mujeres, sino también en la participación de las mismas en el ámbito comunitario y público, así como en las dinámicas de violencia que viven y perciben sus hijos o familiares dentro del hogar. La violencia y hostigamiento en contra de los jóvenes, por otro lado, también se hizo presente en todos los casos. En la colonia Nuevo Almaguer, en Guadalupe,

<sup>8</sup>Jenny Pearce, “Violence, Power and Participation: Building Citizenship in the Contexts of Chronic Violence”, *IDS Working Paper* 274, Brighton, IDS, marzo de 2007.

por ejemplo, los jóvenes expresaron ser víctimas de dinámicas de discriminación y estigma tanto por parte de los adultos habitantes de la comunidad como por parte de la policía municipal. En Apatzingán, por su parte, los jóvenes están expuestos no sólo a dinámicas de hostigamiento por parte de las autoridades, sino a la posibilidad de ser reclutados por los grupos criminales. Y en Tijuana los jóvenes se sienten constantemente discriminados por parte de una policía que los ve y trata solamente como sujetos potencialmente violentos o peligrosos. La situación de vulnerabilidad de los jóvenes y la percepción de que están vinculados con el crimen explican que algunos habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas en Apatzingán se refieran a ellos como una “generación perdida”.

Como plantea el capítulo de Cecilia Farfán en este libro, existe un entendimiento limitado sobre las violencias no-letales que se viven en el país. La extorsión, por ejemplo, tiene impactos claros tanto en la economía como en la sensación de indefensión e inseguridad de aquellas personas que son víctimas de la misma y que no pueden denunciar su ocurrencia por temor a represalias. Asimismo, la violencia intrafamiliar y la violencia que se vive en el ámbito escolar han hecho que espacios de socialización que tradicionalmente se piensan como espacios de protección o de desarrollo de las capacidades y libertades de las personas se hayan convertido en lugares de vulnerabilidad y desamparo.

Entender la forma en la que se manifiestan estas “otras violencias”, no obstante, requiere de un acercamiento al fenómeno que vaya más allá de las estadísticas, el uso de cifras oficiales o

de fuentes periodísticas. En el marco de este proyecto, la violencia en contra de jóvenes y mujeres, el temor a la extorsión, la intimidación por parte de actores del Estado, son parte de esas violencias en plural que los miembros del equipo de investigación pudieron identificar gracias al diálogo e intercambio de saberes que la metodología de la “co-construcción de seguridad desde abajo” facilita.

Darle sentido a la violencia:  
los atajos y las trampas de la inseguridad

Otro de los hallazgos de la investigación tiene que ver con la creación de ciertas narrativas o discursos elaborados por parte de las comunidades en aras de darle sentido a la violencia que viven. Frente a un contexto de constante vulnerabilidad y amenaza, tanto por parte de actores criminales como de autoridades que deberían, en principio, proveerles de mecanismos de protección, las comunidades han construido narrativas explicativas de la violencia. Dichas narrativas tienden a estar centradas en la existencia de “otros” —ya sea jóvenes o gente de fuera de la comunidad o localidad— que son señalados como responsables de los asesinatos, extorsiones o robos que les afectan.

En el caso de Tijuana, como expresa el capítulo correspondiente, se habla claramente de la violencia como un producto de la llegada de miembros ajenos a la comunidad. Específicamente, habitantes de la colonia Sánchez Taboada hablan y se quejan de una narco-cultura y violencia que fue llevada por los sinaloenses

y por gente vinculada a los grupos criminales de Sinaloa. De acuerdo a su experiencia y percepción, previo a la llegada de estos grupos, la colonia “no era así” y había un mayor respeto a la vida e integridad física de las personas que ahí habitan. Asimismo, en Guadalupe, como se mencionó ya, los jóvenes son vistos con sospecha por parte de miembros de la propia comunidad, así como por policías que interactúan de manera cotidiana con miembros de la colonia Nuevo Almaguer. El resultado de esto es que los jóvenes no son sólo estigmatizados, sino también marginalizados y vistos como individuos que, a pesar de formar parte de la colonia, son percibidos como esos “otros” que amenazan la seguridad de los habitantes.

Como dejan entrever estos ejemplos, el impacto de estas narrativas de la violencia ha sido sumamente negativo. Si bien han permitido que habitantes de estas comunidades le den orden y sentido a una violencia que de otra manera parecería arbitraria o totalmente fuera de control, dichas narrativas están basadas en percepciones equívocas y en prejuicios que no hacen más que acentuar las divisiones dentro de estas localidades. Más aún, estos discursos que identifican a “otros” como culpables de la violencia contribuyen a legitimar el uso de medidas reactivas y represivas, en tanto desvían la atención de las causas estructurales e institucionales de la violencia.

Asimismo, estas narrativas suelen promover una visión que plantea que la violencia es selectiva, impactando sólo a aquellos que “están metidos en algo malo”. Lo anterior aumenta la tolerancia de la población frente a medidas represivas o frente a formas

de gobernanza que, como las descritas por Catheryn Camacho, involucran un nivel de connivencia entre actores estatales y criminales que son aceptados mientras mantengan un equilibrio que no trastoca fundamentalmente la seguridad de los habitantes de las comunidades.

La existencia de estas narrativas fue identificada prácticamente por todos los equipos de investigación en las cuatro localidades de estudio. El hecho de que la metodología propuesta por este proceso busque ir más allá del diagnóstico, permitió que se fomentaran espacios de diálogo con las comunidades para analizar críticamente la responsabilidad y capacidad de cambio que ellos mismos tienen en la construcción de seguridad en sus localidades. En Guadalupe, por ejemplo, los habitantes de Nuevo Almaguer reconocieron que ellos podían ser parte del cambio, generando por ejemplo mayores oportunidades de participación para los jóvenes y para que fuesen tratados de manera más igualitaria y digna. Y en Apatzingán, habitantes de la Lázaro Cárdenas propusieron en sus agendas de seguridad local organizar actividades educativas y artísticas que fomentaran el espíritu colectivo, la cultura de la legalidad y la participación equitativa de los miembros de la comunidad.

El quehacer y la cultura política a nivel local:  
Estado intermitente y clientelismo político

El trabajo realizado en las cuatro localidades arrojó también hallazgos importantes relativos al tipo de presencia y alcance que

ha tenido el Estado mexicano a nivel local en materia de seguridad, así como de las dinámicas políticas que caracterizan a las comunidades afectadas por múltiples violencias. Lo anterior fue posible gracias al diálogo y a la confianza construida entre los investigadores y los participantes, y pone de manifiesto el tipo de entendimiento detallado y complejo de la inseguridad que puede lograrse a través de este tipo de metodología.

Uno de los hallazgos en esta materia fue el referente a la presencia del Estado en estas comunidades. Como afirma el capítulo referente a Apatzingán, los problemas de inseguridad y violencia no se derivan necesariamente de un Estado ausente. Más bien, tienen que ver con la presencia de un Estado que se ha hecho presente de manera represiva e intermitente, a través de operativos de seguridad militarizados que, lejos de co-construir seguridad con las poblaciones afectadas, han estado basados en una lógica de combate frente los grupos criminales y no en un afán de proteger y proveer seguridad como un bien público. En Apatzingán la presencia del Estado se manifiesta de manera doble y aparentemente contradictoria. Se trata de un Estado que ha estado sumamente presente en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado, pero que a su vez ha estado ausente en términos de formar capacidades locales en materia de seguridad, así como en lo que toca a la provisión de infraestructura y servicios públicos básicos. Lo mismo puede decirse de Acapulco, un caso en el que, aunque no se lograron desarrollar agendas locales por los retos de seguridad que encontró el equipo de investigación, se pudo realizar también un trabajo de diálogo con las comunidades.

En esta última ciudad, la presencia del Estado y también de la inversión en infraestructura y servicios ha sido desigual y selectiva, beneficiando claramente a aquellas zonas o colonias vinculadas con el sector turismo, pero dejando desprovistas a aquellas que no son consideradas económicamente prioritarias. Asimismo, la provisión de seguridad y los recursos públicos en materia de prevención y combate al delito han estado también distribuidos de manera inequitativa, dejando que grupos y colonias enteras deban proveerse de mecanismos informales, improvisados, o incluso ilegales, para proporcionarse seguridad.

El tema de la presencia selectiva o intermitente del Estado nos lleva al segundo hallazgo que en esta materia destacó el proceso de investigación. Nos referimos a la existencia de patrones de clientelismo político que impiden la creación de espacios autónomos de gestión desde la sociedad civil y que impiden una provisión de servicios —desde infraestructura y servicios hasta seguridad— que sea realmente de carácter público.

Como se expresa en el capítulo correspondiente a Guadalupe, en la colonia Nuevo Almaguer, desde sus orígenes estuvieron presentes estas lógicas de clientelismo y corrupción. Fue a través de las acciones de actores informales que prometieron apoyo a familias que se encontraban sin tierras ni recursos como se creó esta colonia, a partir de asentamientos ilegales que continúan siendo una fuente de inseguridad patrimonial para sus habitantes. Las dinámicas de clientelismo continuarían los años subsiguientes, manifestándose en programas o proyectos que están sujetos a vaivenes políticos o electorales. Dichas dinámicas han mermado no

solamente la confianza que los habitantes tienen en las autoridades, sino que también ha dado pie a que no se generen espacios autónomos de diálogo y gestión que estén libres de estas redes informales o de las distintas facciones políticas que estas redes representan.

En Tijuana, también, el equipo de investigación y los habitantes de la Sánchez Taboada dieron cuenta del efecto pernicioso que el clientelismo y las divisiones políticas han tenido para el quehacer ciudadano y la capacidad de organización de la comunidad. De hecho, en un inicio, fue difícil para este equipo transmitirles a los habitantes de la colonia que este proceso no obedecía a intereses partidistas o a fines electorales, sino que se trataba justamente de un espacio para que ellos expresaran sus necesidades y demandas de manera autónoma. En Acapulco, por su parte, la población se quejaba de que los políticos sólo aparecían cuando estaban en campaña, pero una vez terminadas las elecciones, no se les volvía a ver el polvo. Estas dinámicas de clientelismo hicieron que en todas las localidades los equipos tuvieran que transmitir a las comunidades el valor intrínseco que participar en un proceso de co-construcción y diálogo sobre sus necesidades tendría en sus vidas.

Pese a estos retos, fue claro para los equipos de investigación cómo, ante la oportunidad de contar con espacios de diálogo, los habitantes de estas localidades expresaron deseos de convertirse en agentes de cambio y respondieron de forma positiva a la posibilidad de contar con espacios libres de intereses partidistas o facciones políticas. Una lección entonces de este proceso de in-

vestigación es que la cultura política de clientelismo político puede revertirse y transformarse mediante la creación de espacios de diálogo autónomos y con vistas a transformar la realidad social.

Más aún, como recupera el capítulo de Catheryn Camacho, a pesar de que el énfasis de la política de seguridad del país en los últimos diez años ha estado centrado en la represión, sería falso afirmar que desde el Estado mexicano no se han realizado algunos esfuerzos importantes en materia de prevención. En este sentido, la presencia intermitente, parcial y fundamentalmente represiva que parece haber tenido el Estado mexicano en las localidades que estudiamos en este proceso puede también ser revertida. Existen tanto programas como instituciones estatales que han hecho una apuesta clara por atender las raíces sociales de la violencia en México. Identificar y corregir el impacto negativo que la rivalidad, la falta de coordinación y la politización de estos esfuerzos ha tenido en su correcta aplicación es un primer paso para fortalecer la legitimidad y viabilidad de una política de seguridad más integral. El siguiente paso es desde luego recoger las voces de las comunidades más afectadas por la violencia e incorporar las propuestas que se hacen “desde abajo” en materia de seguridad.

La co-construcción: creando espacios  
para repensar la violencia y actuar frente a la misma

La riqueza de los hallazgos que hemos aquí presentado se derivan sin duda alguna del tipo de saberes, así como del afán transformador que la metodología de “co-construcción de seguridad desde

abajo” promueve. Como describen Alexandra Abello Colak y Jenny Pearce en el capítulo metodológico del libro, dicha metodología busca “no sólo repensar, sino ayudar a transformar respuestas y políticas de seguridad en contextos de violencia crónica, como los que existen en varias ciudades de América Latina y el Caribe, junto con aquellos que son directamente impactados por la crisis de violencia e inseguridad que vive la región”.

La apuesta de esta metodología es así no solamente generar un diagnóstico sobre la inseguridad que esté basado en la experiencia y percepciones de las personas que, desde lo local, viven la violencia e inseguridad de manera directa. La apuesta es, también, pensar junto con los habitantes de estas colonias cuáles son algunos de los pasos o respuestas que deben tomarse para construir seguridad desde un enfoque centrado en las personas, en su dignidad, y en formas de convivencia que no reproduzcan las violencias y dinámicas de discriminación y exclusión que les han caracterizado.

La co-construcción de agendas de seguridad local de la mano de las comunidades participantes nos permitió constatar la importancia que tiene el ámbito de lo local en lograr un mejor entendimiento sobre la inseguridad en México. Estas agendas revelan cómo la violencia y la criminalidad se manifiestan de forma específica en cada localidad, pero también cómo cada lugar tiene una serie de demandas y propuestas distintas. El ámbito local, y más específicamente cada colonia, es un laboratorio importante para repensar la seguridad. Claramente las respuestas provenientes de la capital del país son genéricas y son incapaces de articular un plan de acción que permita atender las modalidades locales.

Además de destacar la importancia de lo local, la co-construcción arrojó la importancia que tres sectores de la sociedad tienen o deberían tener en el diseño y ejecución de políticas de seguridad en México: los jóvenes, las mujeres y los empresarios. Los jóvenes son generalmente el sector más difícil de atraer a un diálogo de cómo mejorar la seguridad. Sin embargo, es indudable que su vulnerabilidad particular frente a la violencia los convierte en un sector clave. Más allá de los estigmas y dinámicas de discriminación que generalmente afectan a este grupo, todas las estadísticas muestran que en México como en América Latina, en el sector de varones jóvenes se concentran tanto las víctimas como los victimarios. El diálogo con ellos, por lo tanto, es imprescindible para lograr respuestas que emanen desde abajo, es decir, desde las propias comunidades.

A propósito de los jóvenes, una de las sorpresas de la investigación es que la emigración a Estados Unidos, especialmente la de los jóvenes varones, no parece estar presente en su perspectiva de vida. Esto es, nuestros equipos de investigación en las cuatro ciudades no encontraron que los jóvenes tengan en mente, como sí lo tenían hace una década, la emigración a Estados Unidos como una válvula de escape a sus dificultades, ya sea provocadas por la violencia o la marginación económica. Esto llama la atención en particular, puesto que tres de las cuatro localidades —Acapulco, Apatzingán y Tijuana— pertenecen a estados con una fuerte tradición a emigrar.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Cabe mencionar que la disminución de los flujos de migración a Estados Unidos es contundente: en el año pico de la emigración, 770 mil mexicanos emigraron a Esta-

Otro sector de la sociedad que cobra una importancia fundamental en la formulación de políticas de seguridad y en la transformación de las comunidades son las mujeres, en especial las madres de familia. Ya sea que estén incorporadas o no al mercado de trabajo, las mujeres son las que por lo general se dan tiempo para participar en los espacios de diálogo que se dan dentro de la comunidad, ya sea en espacios que tienen que ver con la educación de los hijos, o bien aquellos que son convocados por alguna organización o representante de la autoridad local. En definitiva, la investigación demostró que pese a ser un grupo que enfrenta formas de violencia no sólo en el ámbito público sino también en el privado, las mujeres se muestran en lo general más dispuestas a dialogar, a compartir sus experiencias, y en asumir liderazgos frente a iniciativas que busquen un cambio para darle viabilidad al desarrollo de sus hijos.

Finalmente, un sector que debería asumir un papel más protagónico en la co-construcción de la seguridad corresponde al de los empresarios. En Tijuana, por ejemplo, existe un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, presidido por un empresariado que tiene un pormenorizado diagnóstico de la violencia en la ciudad. Pero el diagnóstico tiene dos problemas. Primero, no aterriza en lo local, o parecería que como la nueva violencia es en las colonias más pobres, no es tan importante como la violencia de 2007-2010 que se ejercía en la zona centro. Segundo, se hace demasiado

---

dos Unidos, mientras que en 2010 sólo 140 mil lo hicieron. Véase, por ejemplo, Ana González Barrera, “More Mexicans Leaving Than Coming to the U.S.”, Pew Research Center. Disponible en: <http://www.pewhispanic.org/2015/11/19/more-mexicans-leaving-than-coming-to-the-u-s/> [última visita: 1 de diciembre de 2018].

énfasis en el homicidio, lo que como hemos visto hace invisible a las otras violencias. Lo que también fue posible percibir tanto en Tijuana como en Acapulco es que los empresarios tienen una posición ambivalente frente a la necesidad de denunciar la violencia. Utilizan la información supuestamente para presionar a las autoridades locales y estatales, pero a la vez “no quieren hacer mucho ruido”, es decir, denunciar públicamente la violencia, pues esto podría tener un impacto negativo en el turismo y otro tipo de actividades económicas.

Como mencionamos al inicio de esta conclusión, el entendimiento sobre la violencia e inseguridad en México se ha nutrido en los últimos años de diversos estudios y diagnósticos. La metodología basada en la co-construcción y en el diálogo de saberes busca aportar al debate actual sobre la seguridad en México. Nuestros hallazgos sugieren que ni las estadísticas basadas en homicidio ni los análisis que giran en torno al narcotráfico y las políticas del combate frente al mismo alcanzan para describir las múltiples formas de inseguridad y violencia que viven las personas en su día a día en las colonias más afectadas. La metodología no está sin duda exenta de retos. Como lo discuten Falko Ernst y Armando Rodríguez Luna, los riesgos para la integridad física de aquellos que buscan indagar en las razones y manifestaciones de la violencia son reales. Aunque hasta el momento han sido los periodistas los que, en su afán de entender y dar a conocer las lógicas del mundo criminal, han sido las principales víctimas de amenazas e intimidación, es sin duda este tipo de investigaciones —más cercanas a lo local y reveladoras de la complejidad de las

violencias que se viven en las comunidades— las que podrían poner a los académicos también en potencial riesgo.

Además de los protocolos de seguridad que esta investigación puso en marcha en aras de prevenir y responder frente a escenarios de riesgo para los participantes, es claro que esta metodología se beneficiaría enormemente de una colaboración más estrecha y de la creación de vínculos de confianza entre sociedad civil, comunidad y gobierno. Es quizás uno de los puntos más espinosos dada la fractura que existe en las relaciones sociedad-Estado en estas comunidades; pero es uno de los pasos que a nuestro parecer permitiría proteger a los participantes —tanto investigadores como miembros de la comunidad—, así como sentar las bases de un diálogo más positivo y constructivo “desde abajo hacia arriba” en materia de seguridad.